

La sumisa ministra



Tiempo de lectura: 3 min.

[Jesús Elorza G.](#)

La llegada de un directivo a un nuevo puesto de alta responsabilidad siempre supone un reto personal no exento de riesgos. El proceso de aterrizaje exige observar con detenimiento el entorno, pulir las fricciones inevitables entre las expectativas y la realidad, y, sobre todo, evitar inspirar desconfianza e inseguridad entre sus nuevos subordinados. En el ámbito de la educación superior venezolana, este proceso ha cobrado una relevancia crítica tras la reciente designación de la profesora Ana María Sanjuán como jefa de la cartera universitaria.

Psicóloga de profesión y con trayectoria docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Sanjuán fue nombrada el pasado 18 de marzo de 2026 por Delcy Rodríguez como sucesora de Ricardo Sánchez. Por su procedencia de las aulas ucevistas, la comunidad universitaria asumía razonablemente que la nueva ministra poseía pleno conocimiento sobre los padecimientos del sector en materia de autonomía y derechos laborales. Al fin y al cabo, ella misma, en su condición de docente, sufrió en carne propia las consecuencias de la congelación del sueldo base en 130 bolívares vigente desde el año 2022. Sin embargo, sus primeras acciones en el cargo han sembrado serias dudas y configuran lo que muchos dentro de la academia califican como una decepción anunciada.

Primeras Señales: Sumisión y Silencio de Oficio

El estreno de la gestión de Sanjuán estuvo marcado por un primer incidente que dejó al descubierto la naturaleza de su margen de maniobra. A pocas horas de iniciar su gestión, se produjo la destitución fulminante de su viceministro —apodado jocosamente en los pasillos universitarios como “El Breve”— por orden directa del Ejecutivo Nacional. Frente a esta abierta intromisión que vulneró la conformación de su propio equipo de trabajo, la ministra optó por no decir “ni pío”, dando una temprana muestra de asimilación a las dinámicas de sumisión del régimen.

El verdadero bautismo de fuego ocurrió a raíz de la entrega del denominado "Bono de Responsabilidad Profesional y Académica" a finales de abril de 2026. Esta medida generó un inmediato y profundo conflicto en los recintos universitarios debido a la exclusión total del personal contratado, administrativo, obrero y, de manera muy alarmante, del personal jubilado.

Frente a la ola de reclamos gremiales y sindicales, la ministra Sanjuán ha ensayado un discurso de pretendida empatía, afirmando que su despacho "no desconoce la situación de las universidades ni la deuda social con el sector", asegurando que los mecanismos de diálogo permanecen abiertos. No obstante, detrás de esta retórica se esconde lo que los gremios catalogan como un calculado "silencio administrativo".

La Anatomía de la Evasión: Las Dos Estrategias del Despacho

La falta de una postura clara de aprobación o rechazo por parte de la ministra respecto a la exclusión de los jubilados y contratados se sostiene sobre dos pilares fundamentales:

- Desvío de responsabilidad al Ejecutivo Central: La ministra argumenta indirectamente que las directrices de estos nuevos bonos provienen directamente de la presidencia encargada y que su ejecución se realiza de forma automatizada a través de la Plataforma Patria. Al omitir la emisión de un lineamiento o instructivo formal desde el Ministerio de Educación Universitaria, su despacho evita validar o invalidar legalmente el justo reclamo de los afectados, amparándose en una supuesta "justificación técnica".
- Contradicción entre el diálogo y las acciones: Si bien se han instalado mesas de negociación permanente con las asociaciones de profesores (como la APUCV), estos encuentros han demostrado ser estériles. Los gremios denuncian que el

ministerio se limita a escuchar las quejas, utilizándolas como un desahogo institucional, pero sin ofrecer jamás respuestas concretas ni soluciones reales sobre la inclusión del personal despojado de sus beneficios.

El balance inicial de la gestión de Ana María Sanjuán desmitifica cualquier expectativa de cambio basada en su origen académico. Al actuar como una pieza burocrática más dedicada a justificar las arbitrariedades y el modelo de precarización laboral del régimen, la gestión ministerial ha cerrado las puertas a una concertación genuina.

Ante este panorama donde la simulación del diálogo sustituye al cumplimiento de la Constitución, en los pasillos de las universidades venezolanas vuelve a cobrar total vigencia aquella histórica consigna de los años sesenta:

“Desechar las ilusiones y prepararse para la lucha”.

La comunidad universitaria de obreros, empleados, estudiantes y profesores comprende que la restitución de la dignidad salarial y el respeto a la academia no vendrán de concesiones burocráticas, sino de la cohesión y la movilización firme del sector.

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)